

cia atenuante el poco valor de la moneda que circulaba, que no causó perjuicio de ninguna especie; así es que haciendo uso de la facultad que concede á los jueces la ley 8ª tit. 31 part. 7ª, y de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, fallo.

Se dá por conpurgado á José Encarnacion Hernandez con el tiempo que ha sufrido de prision, del delito de circulacion y portacion de moneda falsa de que se le hizo cargo.

Y quedando confirmada la sentencia que pronunció el C. Juez de Distrito de Guanajuato á veintinueve de Junio último, ejecutase remitiendo la secretaria los recados que corresponden, y elévese ésta causa á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

El C. Magistrado de Circuito así lo decretó y firmó Doy fé.—*Aurelio Ránvis Portugal.*—*Ramon Reynoso.*

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador general de la Nacion dice: Que el Juzgado de Distrito de Guanajuato siguió causa contra Encarnacion Hernandez por circulacion de moneda falsa; y por sentencia definitiva lo dió por conpurgado con la prision y padecimientos sufridos. Como esta sentencia fué confirmada en todas sus partes por el Tribunal de Circuito de Querétaro, y como los procedimientos de una y otra instancia han sido arreglados á derecho, el que suscribe pide se dé por revisado el proceso.

México Julio veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*L. Guzman.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvase las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—(Firmado.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis María Aguilar*—secretario.

Son copias. México, Agosto primero de 1871.—*Lic. Agustín Peralta.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Mérida por el C. Rodolfo G. Canton, contra los actos del Tesorero municipal de aquella ciudad, en virtud de los cuales se mandó á la policia en auxilio de los agentes del Ayuntamiento, para hacer efectivo el pago de unos arbitrios que adeudaba el quejoso.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Este juicio de amparo ha sido promovido por el C. Lic. Rodolfo G. Canton, contra los actos del Tesorero de los fondos municipales de esta ciudad, en virtud de los que le ha tenido sitiada su casa de comercio conocida con el nombre de "Libreria Meridana," para hacer efectivo el pago de unos arbitrios que el quejoso alega no adeudar por ser comerciante *por menor* y no comprenderle el decreto local que los establece para los que hacen el comercio por mayor. Un poco mas tarde, y cuando todavía se estaba tramitando el ocurso respectivo del C. Canton, presentó otro en que vino acusando una nueva tropelia cometida con el hecho de que el mismo C. Tesorero habia destacado una pequeña fuerza armada á las órdenes de un Sr. Pavia que hace de ministro ejecutor, para que constituida en la hacienda "Opichen" embargasen lo necesario para llevar á efecto el pago ejecu-

tivo que aquí no se había podido conseguir, resultando de esa expedición que el C. Eraclio Canton, hermano del ejecutado, que accidentalmente se hallaba en aquella finca, hubiese tenido que entregar veinticinco pesos como por rescate de diez cabezas de ganado vacuno, que, según la copia de las actas que el ejecutante ha anexado á su informe para justificar sus procedimientos, se encontraban ya en vía de ser conducidas á esta capital. En ambos escritos trae el actor por fundamento de su queja, la fracción 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, pues que los actos reclamados por él violan las garantías individuales que protegen los artículos 16 y 17 de la Constitución, pidiendo en uno y otro que se suspendan desde luego, conforme á lo prevenido en el artículo 6º de la citada ley orgánica. El fiscal á quien se sirvió vd. oír sobre este punto de la suspensión, tuvo por conveniente pedir que la decretara vd., por que comprendía que las facultades económico-coactivas de que está investido el C. Tesorero de los fondos de este municipio para proceder al aseguramiento de bienes equivalentes á la deuda que resista pagar el deudo contumáz, no lo autorizan en manera alguna á emplear medidas tan violentas ó irregulares, que las llamadas autoridades del imperio ó de otra administración despótica no se hubieran atrevido á emplear, por respeto á las leyes que trazan la senda que debe seguirse en los embargos. El fiscal no alcanza á explicarse, por que siendo de derecho común, que no ignore el C. Tesorero de los fondos municipales en su calidad de abogado, el que la notificación de pago se haga en persona al deudor, la mandó hacer á una extraña en la hacienda "Opichen," en donde sabía con toda evidencia, á causa del ascho en que lo tenía, que no podría encontrar al C. Rodolfo G. Canton que era con quien necesariamente debía entenderse aquella diligencia. Y si es difícil explicarse la razón de semejante irregularidad, mucho mas difícil es darse

cuenta de por que siendo un beneficio legal del ejecutado señalar los bienes que le parezcan para el embargo, no le fué permitido al C. Eraclio Canton usar de ese derecho, rechazándosele por el que *hacia* de ejecutor, las piezas de caballar que designó para que fuesen traídas sin las lesiones que sufrirían las diez de ganado vacuno tomadas arbitrariamente.

En verdad que al hacerse cargo de estos procedimientos, el hombre mas imparcial, olvidándose por un momento de que nos hallamos en plena República, y protegidos por su Constitución que es como la divinidad tutelar de todas las garantías, creeria que hemos caído en una de esas revueltas que sacan á la sociedad de su aplomo ordinario, y en que algun capitancillo del desorden hacia requisiciones por cuenta de la revolución. El fiscal pues, que entendió que ese modo de proceder de los agentes del repetido Tesorero violaba las garantías que otorgan los artículos 16 y 17 de la Constitución, pidió, como ha dicho antes, que se suspendiera el acto, á fin de que se entrase en la vía regular de las ejecuciones. Pero una vez que el quejoso no ha objetado de inconstitucional el decreto del Estado que establece el arbitrio que se le cobra ejecutivamente, pues que solo se concreta á decir que no es aplicable á el, indicando una cuestión que no es materia de amparo ni toca á la competencia de vd. resolver. Y una vez tambien que los actos reclamados han dejado de existir, á pesar de no haber vd. decretado la suspensión de ellos, quedando solo por decidir si procede ó no el amparo con respecto al pago hecho, el fiscal pide que vd. declare no ser procedente, en virtud de no haberse alegado siquiera que es contrario á la Constitución el impuesto local que se cobra, de modo que si el fiscal creyó atentatoria la forma de la ejecución, no cree que esta lo sea en el fondo, por tratarse de un crédito que tal vez sea injusto pero no anticonstitucional.

Mérida, Junio primero de mil ochocien-

tos setenta y uno.—(Firmado.)—*P. Higueros.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

«Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Junio diez de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Rodolfo G. Canton, contra actos del C. Tesorero de este municipio, por haber rodeado de policías su establecimiento «la Librería meridana» y por haber mandado á un empleado de su oficina á embargar, por la fuerza, ganado en su hacienda Opichen, cuyos actos, se alega, que violan los artículos 13, 16 y 17 de la Constitución de la República. Visto el auto en que se negó la suspensión de los hechos reclamados; el informe del C. Tesorero municipal; lo pedido por el C. Fiscal, con la citación para sentencia y cuanto mas ver era necesario.

Considerando: que si bien es cierto que el funcionario contra quien se pide amparo, en efecto rodeo de policías el referido establecimiento del C. Canton, tambien lo es que lo hizo porque se negó á pagar la contribucion que le cobraba y aun á dejar que le embargara, optando el medio de cerrar dicho establecimiento, embargo que podia llevar á cabo por las leyes locales que cita en su informe, las cuales le conceden facultades económico-coactivas y están de acuerdo con el artículo 3º de la suprema ley de 20 de Enero de mil ochocientos treinta y siete. Que esta última ley le concede hasta la facultad de cerrar el establecimiento, cosa que pudo verificar en razon al recargo de contribucion federal que comprendia el derecho municipal de que se trata; no estando de mas advertir, que esta ley está vigente y ha sido respetada por la Corte Suprema de la Nacion.

Que aunque el quejoso creyese que no debía pagar la contribucion que se le cobra-

ba, la cual no ha argüido de anticonstitucional, estaba obligado á pagar, sin perjuicio de usar los recursos legales que señala la ley para tales casos; pero no debía resistirse, como lo hizo, no solo al pago sino hasta á que se le embargara, cerrando su establecimiento y dando lugar á que se ocurriera al embargo de ganado en su hacienda Opichen: Que conforme á la citada ley de mil ochocientos treinta y siete, podia hacer el embargo el Tesorero municipal por sí ó por otro empleado de su oficina, usando de la fuerza caso de resistencia como pudo suceder, si no se paga el impuesto cobrado. Por lo expuesto y de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, la autoridad, en nombre de los supremos poderes de la Union, decreta:

Primero. No ha lugar al amparo solicitado.

Segundo. Sáquese testimonio de este fallo para su publicacion; y elévense los autos á la Corte Suprema de la Nacion para que sea revisado, con arreglo á los artículos 13 y 27 de la Suprema ley de 20 de Enero de 1869. Notifíquese—*I. Manzánilla.*—ante mi, *José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Mérida, por el C. Rodolfo G. Canton contra los actos del Tesorero municipal de aquella ciudad, en virtud de los cuales se mandó á la policía en auxilio de los agentes del Ayuntamiento, para hacer efectivo el pago de unos arbitrios que aducaba el quejoso, según la cuota que se le designó por la Junta respectiva, calificándole de comerciante por mayor en el establecimiento que tiene en Mérida. Visto el 2º escrito de queja mandado acu-

mular al primero por el Juzgado de Distrito, en que alega el C. Rodolfo G. Canton que la misma autoridad contra quien solicita el amparo, no pudiendo hacer efectivo el pago del impuesto en los bienes que posee en la ciudad, había enviado á su executor á la hacienda de Opichen de su propiedad, donde se había trabado ejecución en diez cabezas de ganado mayor, cuya providencia quedó levantada por haber entregado el hermano del peticionario la cantidad por la cual era requerido; alegando, que con dichos actos se violaban en su persona las garantías que otorgan los artículos 16 y 17 de la Constitución federal. Visto el parecer del Ministerio público; el informe con justificación rendido por la autoridad respectiva y las demás constancias de autos.

Considerando: que el Tesorero municipal de Mérida ha cobrado en la órbita de sus atribuciones al notificar el mandamiento de pago al C. Rodolfo G. Canton, y vista su oposición, hacer efectivo el embargo en sus bienes, usando de los recursos que conceden las leyes en los casos como el presente, en que se resisten los causantes al pago de los impuestos.

Considerando: que dichas providencias son arregladas á derecho y que el quejoso podía usar de los que cree asistirle, ante quien corresponda, por lo que respecta á la apreciación hecha por la Junta cuotizadora que le ha designado como comerciante por mayor, sin oponer la resistencia de que ha usado contra los agentes del poder público. Con tales fundamentos se decreta:

Primero. Se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Mérida en la parte que declara, en nombre de los Poderes de la Unión, que no ha lugar al amparo solicitado.

Segundo. Con arreglo al artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se le impone al quejoso la multa de doscientos pesos.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado

remistente con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos respecto del primer punto y por mayoría respecto del segundo, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zuvala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar* secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto dos de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de esta capital por el C. Lic. Ezequiel Montes, en representación de los miembros del Ayuntamiento de esta ciudad del presente año, contra la orden del Gobierno del Distrito que los suspendió de sus funciones.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El C. Promotor dice: que habiendo interpuesto el C. Lic. Ezequiel Montes, ante el Juzgado recurso de amparo á nombre de los CC. municipales que le confirieron el poder que obra en autos, por haber sido suspensos en sus funciones municipales por la orden que el C. gobernador Gabino Bustamante comunicó el C. José M. Lozano, presidente del Ayuntamiento suspenso y acompañó á su escrito, quejándose de que en las personas de sus representados se violaron las garantías que concede la Constitución en sus artículos 20 y 21. Sustanciado el juicio con arreglo á la ley y man-